

Derechización en la Universidad. El caso argentino

Talento, Miguel

Miguel Talento: Abogado argentino. Dirigente estudiantil peronista en la década del 70, con estudios de posgrado en educación, y especializado en temas universitarios.

Tradicionalmente, cuna de todas las corrientes contestatarias, la universidad argentina generó un fenómeno atípico al recuperar el país la democracia; docentes y - oh, sorpresa - estudiantes, se derechosaron abiertamente y en masa, como reacción ante una crisis institucional que alcanza a todos los niveles en los centros académicos. Un clima cultural que exalta - en el conjunto social - el individualismo y la desolidaridad, donde prima el desencanto por los modelos alternativos, el tercermundismo y el socialismo «real», ha sumado factores para la derechosación, que no tiene aún respuesta de los sectores progresistas, desconcertados ante la nueva situación.

Como todo fenómeno nuevo, la consolidación política de la derecha liberal en la universidad argentina produjo sorpresa y despertó interrogantes¹. Acostumbrados a la imagen de la universidad como el recinto privilegiado de todas las variantes contestatarias, perseguidas con celo (y desapariciones) por las dictaduras militares de turno, nuestro sentido común se aturdió. En este caso, los hechos desafían las lecturas consagradas o ingenuas de la realidad universitaria: ha surgido una derecha dinámica, con política de masas. En efecto, existe una derecha que gana voluntades más allá de sus propias filas, como lo muestra una encuesta reciente sobre sus votantes: sólo uno de cada cuatro vota a su correlato político fuera de los claustros.

¹Este análisis es específicamente argentino, por las condiciones particulares que rodean la transición democrática local. En efecto, las características de la derrota popular, la devastación producida por el terrorismo de Estado, la caída de la dictadura militar producto de sus desatinos, en particular la derrota de las Malvinas, así como la emergencia del discurso alfonsinista y su particular forma de leer la historia reciente (la teoría de los dos demonios) dominante en la apertura democrática, definen, entre otras condiciones específicas, la situación argentina. En este contexto estamos analizando la crisis inédita de la universidad argentina y la emergencia en este contexto nacional e institucional de una propuesta de masas desde la derecha.

En los últimos decenios, la garantía de las políticas del establishment para la universidad era siempre exterior a la misma. La derecha dominaba, pero no dirigía ni en la universidad ni en el país, sino sobre la base de un acto constitutivo violento y de su capacidad de actualizarlo². Luego entronizaba a sus aliados en la dirección universitaria.

Lo nuevo es la legitimidad y el poder de convocatoria y acumulación del discurso de la derecha en el medio universitario. Y es toda esta situación la que funda la necesidad de abordar la búsqueda de sus claves, de intentar explicaciones.

Para ensayar aquella búsqueda, hay que hacer referencia a la situación de crisis que atraviesa la universidad en el contexto del proceso democrático y encadenar sus efectos, apreciables diariamente, con las características dominantes de la gestión universitaria en curso. En otra dimensión, hay que correlacionar la situación de excepcionalidad universitaria con el clima cultural de la sociedad argentina de los 80, síntesis singular de la derrota popular de los 70 y del terrorismo de Estado. Y en esta misma perspectiva, enmarcar las dificultades del peronismo y la izquierda para reorganizar una acción y una teoría eficientes ante la nueva ecuación política e ideológica operante en la transición democrática.

Por otra parte, en las condiciones estructurales de la universidad, y sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, el impacto de las demandas sociales y, especialmente, la dinámica de la masividad, tiene un efecto devastador sobre la capacidad de respuesta institucional en casi todos los planos de la vida universitaria, generándose condiciones propicias para un procesamiento político hacia la derecha del descontento generalizado que provocan los efectos concretos de la crisis.

Sin advertir el peso de estos condicionantes estructurales y sus conexiones, resulta prácticamente imposible comprender la emergencia del fenómeno liberal³

²La incapacidad de los sectores dominantes de constituir un sistema político estable se subsana por la expeditiva vía del golpe militar, del hecho violento, fundamento de una legalidad sin legitimidad. En este proceso, el instrumento se fue autonomizando y el partido militar sustituyó los objetivos nacionales por los propios: el punto culminante de este dislocamiento fue sin duda la guerra de Malvinas. Para un análisis más extenso de este punto, ver mi artículo sobre «La cuestión militar», en Unidos, N° 19, 1987.

³La denominación «liberal» asumida por la derecha conservadora puede confundir al lector no argentino, sobre todo porque, en otros países, los sectores nacionalistas, reformistas y progresistas, usaron, es ocasiones, esta denominación. El bautismo «liberal» de la derecha argentina, sobre todo después del Estado terrorista implantado por la Junta Militar, busca un nuevo lugar para los viejos sectores conservadores, en la nueva ecuación política operante en la transición democrática. De todos modos cabe destacar que la incorporación de sectores juveniles y la repercusión pública del discurso de la nueva derecha, puede generar compromisos y prácticas novedosas en la dirigencia de dicho campo, que signifiquen aportes para la continuidad democrática.

universitario en Buenos Aires.

En lo que sigue intentaremos entender las razones del desarrollo político de la derecha universitaria, echando una ojeada sobre las condiciones que la hacen históricamente posible, sin ninguna pretensión de exhaustividad y sin penetrar, más que puntualmente, en el territorio del análisis de la derecha en sí misma, lo que por su magnitud excedería los límites de este trabajo.

Los datos

La consolidación de la derecha universitaria es un proceso que se desarrolla con rapidez. Inicialmente desplegada en agrupaciones independientes, a comienzos del proceso de transición democrática, se consolida como expresión orgánica de la misma la agrupación Unión Para la Apertura Universitaria (UPAU), con fuertes vínculos y referencia en el partido político mayoritario en la constelación de la derecha argentina, Unión del Centro Democrático (UCD), liderada por Alvaro Alsogaray.

Su centro de desarrollo original estuvo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de donde salió la mayoría de sus dirigentes más representativos: Carlos Maslaton, fundador de UPAU y actualmente concejal metropolitano por UCD desde 1987; Juan Carlos Lynch, actualmente consejero superior estudiantil en la UBA; Juan Curuchet, presidente del Centro de Derecho, amén de otros dirigentes que pasaron a las estructuras partidarias, como Huici, Lozano, Giménez Peña, etc.

La fuerza electoral se manifiesta a nivel estudiantil y en el claustro de graduados y, en lo fundamental, en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, la mayor del país, donde no ha dejado de crecer desde 1983.

En las últimas elecciones realizadas de centros de estudiantes, de voto voluntario, durante 1987, obtuvo el 31 por ciento de los sufragios (de un total de 110.000 votos), sobre una matrícula global que supera los 200.000 alumnos.

Este avance se expresa en el número de delegados obtenidos para el Congreso de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), que pasó de 1 en 1983, a 44 en 1987, sobre un total de 160 asambleístas posibles.

Los guarismos anotados colocan a la derecha liberal (UPAU) como segunda fuerza política del movimiento estudiantil en la UBA, muy cerca de la primera fuerza, la

agrupación Franja Morada, correlato universitario del actual partido gobernante, la Unión Cívica Radical (UCR), que ostenta un 33 por ciento del número de votos señalados más arriba.

En cuanto al claustro de graduados, en la asamblea de todos los graduados electos por facultad para nominar a los cinco representantes del claustro que prevé el Estatuto Universitario para el Consejo Superior de la Universidad, la fuerza que representa a la derecha liberal, la agrupación UDE (Unión de Egresados), obtuvo 20 sufragios sobre 48 consejeros electos, quedando en minoría por estrecho margen sobre los 22 votos que cosechó la alianza triunfante de radicales, peronistas e independientes de izquierda.

A nivel del claustro docente, el de mayor peso en la toma de decisiones académico-políticas, no se alcanza la transparencia que se puede advertir en los restantes claustros, pues las dominantes listas de unidad no permiten establecer con claridad las relaciones de fuerza, siendo indudable el peso de la derecha tradicional y liberal, sobre todo en las facultades de mayor tradición profesional, como Ingeniería, Derecho, Medicina, Ciencias Económicas.

El balance general muestra claramente la consolidación de una tendencia vigorosa a favor de las posiciones de derecha en el ámbito de la UBA, que sirve como catalizador de otras posiciones afines y la torna un bloque de importancia innegable en los órganos colegiados del gobierno universitario.

Por último, cabe señalar que esta tendencia no tiene el mismo despliegue ni similar vigor en el resto de las universidades nacionales. En efecto, la presencia estudiantil de UPAU comienza a desarrollarse, pero a un ritmo sensiblemente diferente que en la Universidad de Buenos Aires. En general, sus pautas de desarrollo tienden a reproducir el esquema originario: comienzan a tener presencia en las universidades de mayor tamaño del interior como La Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y en las carreras de mayor consolidación profesional desde el punto de vista de las prácticas profesionales instaladas y mostradas como viables y exitosas.

Sin embargo, el dato a retener es que no tiene la progresión de sus pares capitalinos, seguramente por la influencia cruzada de los distintos sectores que integran el mosaico de la derecha vernácula.

Crisis estructural y situación de excepción

En primer lugar, hay que reparar en la situación de excepcionalidad que vive la universidad argentina desde el proceso democrático inaugurado en diciembre de 1983, expresión de una crisis de naturaleza y contenidos diferentes a las anteriores, en tanto expresa un dislocamiento estructural de la institución.

Sin duda la historia de la universidad nacional registra las huellas de una historia política signada por la conflictiva constitución del sistema político en Argentina, y en este sentido la universidad ha estado permanentemente cruzada por aquellas condiciones y aquellos resultados.

La marca de la inestabilidad institucional se expresa en el ámbito universitario en la ausencia de tradiciones político-formativas con peso suficiente - o de baja capacidad reproductiva -, como para atravesar los diversos replanteamientos que sufrió la institución. No es este el lugar para ensayar una historia crítica de la universidad argentina, pero es bastante evidente que los conflictos universitarios abarcaron espacios políticos, programáticos y conceptuales de amplitud distinta.

¿Cuál es entonces la particularidad de esta situación de excepción? La idea de excepcionalidad pretende conceptualizar la emergencia de una crisis generalizada de la institución universitaria, dado que en esta ocasión están comprometidos todos los planos importantes de la práctica universitaria: desde la capacidad efectiva de gobernar de sus estructuras de gestión, hasta los contenidos curriculares y los métodos de enseñanza; desde la consideración de las prácticas profesionales y su proyección en el entrenamiento curricular, hasta las formas de diseño de la «extensión universitaria». Está en cuestión la ratificación cotidiana de la utilidad social e institucional de la universidad.

La ausencia de señales claras desde la dirección política del Estado condiciona la ubicación de la institución en la vida nacional. En efecto, la universidad carece de parámetros externos que le fijen criterios elementales de inserción, al no haber un plan nacional de desarrollo que ordene las apuestas institucionales e individuales; que racionalice los perfiles profesionales y las opciones personales de profesionalización. Tampoco existe un plan nacional de educación, que organice los objetivos, entrenamiento y habilidades teórico-prácticas que los estudiantes obtendrán en su paso por los distintos niveles del sistema educativo; que fije metas y características de los estudios universitarios de cara a los antecedentes formativos, a las necesidades sociales y a las prioridades nacionales.

En sentido inverso, la universidad no emite señales claras a la sociedad, y ello se traduce en una devaluación social del espacio universitario, que llega a ser visto como una enorme playa de estacionamiento de jóvenes, a los que se les ofrece el territorio universitario como compensación ante las imposibilidades de inserciones laborales en el contexto de la crisis económica. También la pérdida de prestigio universitario se refleja en la relativización del protagonismo, como consecuencia de los mazazos represivos, cuanto del desarrollo de protagonismos juveniles alternativos en otros espacios sociales. Pero aún sin señales desde el Estado, cabría la posibilidad de generar un programa universitario que armonizando criterios y señalando objetivos y metas proyectara una imagen definida de la universidad hacia la sociedad. El límite para esta perspectiva está en la debilidad de los actores, en las trabas institucionales y en el problema más general de la cultura universitaria.

En una dimensión más general, podemos concluir que el retroceso de la institución en cuanto a su centralidad social de otrora⁴, está en relación directa con su incapacidad para resolver en términos satisfactorios las nuevas demandas que se le plantean en un contexto económico de restricciones y político-social de apertura democrática. Ausente en los grandes temas nacionales, incapaz de convertirse en el lugar de los debates o confrontaciones de las propuestas a los problemas nacionales, la universidad no revalida sus títulos cotidianamente, y el resultado es el aislamiento.

Por otra parte, el reverso interno de esta crisis en sus funcionalidades sociales es la fragmentación y el parcelamiento de la institución en lógicas autonomizadas, corporativas, particulares. La ausencia de objetivos y funciones definidas se manifiesta crudamente en la no formulación de un proyecto institucional que contenga la multiplicidad y diversidad de actividades en las que se despliega la universidad, otorgándole sentido y coherencia. Y dada la historia de nuestra universidad, tampoco existe el paliativo de una lógica institucional sostenida por una estructura burocrática firme que opere aun sin gobierno (al estilo italiano). En suma, no hay una proyección institucional reguladora, imponiéndose una mecánica inercial como modalidad dominante de la práctica universitaria. Signo de la crisis, ella se expresa en que los programas y objetivos se definen desde pequeñas racionalidades que practican el poder desde su horizonte de grupo, no desde programas y voluntades consensadas, explícitas, políticas. Esta dinámica inercial tiende a reducir el ejercicio del poder universitario a una técnica de manipuleo y composición de presiones originadas en los diferentes «espacios» en que se manifiesta la fragmentación institucional.

⁴La pérdida de centralidad del espacio universitario socialmente considerado, en los países latinoamericanos, ha sido destacada con justeza por Tedesco, Juan Carlos en su trabajo *El desafío educativo: calidad y democracia*, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1987.

Gobernabilidad y crisis

El resultado general de los elementos reseñados se manifiesta, desde el punto de vista de la operación institucional, en el problema de la gobernabilidad. Hay dos planos en este concepto: a) gobernabilidad como problema político, es decir, como el grado de consenso que tienen las reglas democráticas dentro y fuera de la institución, y b) gobernabilidad como problema técnicopolítico, es decir, un campo integrado por diversos temas, pero todos referidos a las condiciones reales de respuesta institucional a las demandas recibidas, sus modos de gestión y sus resultados.

Pensando entonces la ecuación de gobernabilidad de la institución como doblemente soportada en lo político y en lo técnico, es posible advertir que la ausencia de planificación a nivel nacional de la cuestión universitaria, así como las debilidades de diseño de gobierno para la gestión académica y administrativa, comprometen hoy, y pueden hacerlo más gravemente en el futuro, los márgenes de gobernabilidad en términos más generales. En efecto, la capacidad de gestionar y resolver los conflictos sectoriales, que se potencian por las condiciones objetivas, tiende a disminuir haciéndose más graves los resultados de los mismos. Y como ya se señaló también, la debilidad de los actores en cuanto al espesor histórico de su compromiso institucional y sectorial (incorporación «activa» en la historia universitaria a través de la memoria y la acción), dificulta la canalización práctica, institucional y teórica de las reivindicaciones sectoriales, que tienden a ser más y más corporativas. Porque es necesario no confundir debilidad con inexistencia o falta de acción: los distintos sectores componentes de la institución existen y se comportan, gestionan sus intereses inmediatos, desarrollan técnicas y estrategias de presión, al margen de su capacidad para incluirlas en marcos políticos, lecturas analíticas más abarcadoras: en una cultura política universitaria.

En este sentido, interesa destacar que el problema de gobernabilidad de la institución está centralmente ubicado en las condiciones de gestión, en la concepción sobre los problemas universitarios, y en los instrumentos reales para ejercer la dirección, más que en la existencia de una oposición orgánica que no respete los elementos centrales de las reglas de juego.

Por otra parte, hoy la conflictiva mayor que afrontan las direcciones universitarias proviene de los conflictos sectoriales, que por su lógica corporativa pueden dar lugar a una radicalización espontánea, cuyos efectos se procesan después a nivel de otras mediaciones, como son las estructuras electorales de los claustros, donde el

desconcierto y la ineficacia se pagan en el avance de la derecha. Así por ejemplo, la huelga docente universitaria de 1987 por reclamos legítimos ante una situación salarial insostenible, reforzó de modo indirecto las posiciones liberales en las elecciones de centros de estudiantes.

A nivel de desarrollo global del sistema universitario⁵ es imprescindible poner fin al despliegue caótico del sistema⁶, con su secuela de tensiones interinstitucionales, como las que se están dando entre la Universidad de Buenos Aires y las universidades que están emplazadas en el conurbano, como el caso de la Universidad de Lomas de Zamora, o al desarrollo de presiones de los municipios que rodean la Capital Federal, en los que avanza la idea de contar con universidades propias, como en el caso de Quilmes o General Sarmiento.

La ausencia de criterios de planificación a nivel de sistema hace inviable una negociación productiva de los límites de las competencias de cada universidad y no proporciona parámetros ecuanímenes para resolver sobre aspiraciones legítimas⁷.

Estructuras obsoletas

Desde otro ángulo, nos encontramos ante estructuras de gestión institucional obsoletas, que muestran la característica insólita de su extensión y su debilidad en forma simultánea. No hay en el caso argentino una burocracia universitaria consolidada, como ocurre con otras universidades latinoamericanas, y en su falencia podemos advertir ciertas virtudes, que a veces en los lugares en que existen generan otro tipo de problemática. En efecto, en el caso argentino tenemos un aparato administrativo integrado por personal no académico, que ha sido el verdadero hilo

⁵En la actualidad, el sistema universitario argentino está compuesto por 26 universidades nacionales creadas por ley y con un régimen autonómico y autárquico, y por 23 universidades privadas. Las instancias de coordinación del sistema se ven entorpecidas tanto por la polémica irresuelta entre autonomía y planificación, la ausencia de legislación universitaria definitiva, como por la situación de inercia institucional que, como ya dijimos, obstaculiza la consideración global de las iniciativas.

⁶La temática del desarrollo sin organicidad y altas dosis de anarquía de los sistemas de educación superior en América Latina ha sido planteada y estudiada, entre otros, por Brunner J.J., en *Universidad y sociedad en América Latina: un esquema de interpretación*, CRESALC-UNESCO, Caracas, 1985. Y se cumple en el caso argentino de modo paradigmático.

⁷La legislación argentina vigente, ley 23068, sancionada enseguida de la instalación del gobierno democrático no previó formas de coordinación interuniversitarias, lo que se intentó paliar, insuficientemente, luego por vía de un decreto del Poder Ejecutivo, creando una instancia de vinculación en cabeza de los rectores de las 26 universidades nacionales. Cabe aclarar que el régimen vigente fue estatuido con carácter de provisorio hasta la sanción de una nueva ley universitaria, pero hasta ahora, casi cinco años después, no hay nueva legislación y la discusión parlamentaria no se ha abordado con profundidad sobre los siete proyectos presentados, entre ellos tres del oficialismo, que ofrecen diferencias apreciables entre sí.

conductor de ciertos aspectos institucionales ante la historia institucional desarticuladora que hemos padecido, y que por esta misma situación, en los niveles jerárquicos, muestra la huella de tanto trajín, con un perfil «apolítico» y «técnico» gestado como reacción casi instintiva ante las mutaciones políticas en la institución, pero que dejan al descubierto limitaciones muy claras para resolver con éxito los nuevos desafíos.

Por otra parte, los mazazos represivos no permitieron nunca la consolidación de estructuras de funcionarios especializados en la gestión académica de la institución. Así se explica la debilidad de las oficinas (o inexistencia) de planeación, y la ausencia de una cultura de la planificación, lo mismo que la debilidad y/o ausencia de servicios de apoyo eficientes, como bibliotecas, centros de desarrollo docente, centros de producción de materiales didácticos y medios de comunicaciones institucionales. Para el lector latinoamericano bastará tal vez para ejemplificar esta situación el hecho de saber que la Universidad de Buenos Aires no cuenta todavía con una gaceta, boletín (hoja informativa) con una periodicidad ni semanal ni mensual⁸. Es decir, no hay flujo permanente ni sistemático de información que garantice una socialidad común a los integrantes de la institución.

Como se ve, resulta difícil remover los hábitos de la privatización de lo público establecido como reflejos institucionales básicos, aun con funcionarios surgidos en el marco de la transición democrática.

En otro nivel, las estructuras de gestión académica muestran un parcelamiento tradicional en el funcionamiento de las facultades, y dentro de las mismas, de la cátedra como la unidad organizativa fundamental, lo que propicia, como se dijo, la fragmentación del poder universitario y la consideración estrecha de las cuestiones académicas. Las universidades nacionales, sobre todo las grandes, son más federaciones de facultades que universidades en un sentido orgánico⁹.

Las estructuras departamentales, la organización curricular por módulos, la profesionalización docente, entre otras, no encuentran sustento suficiente en estas condiciones. Sin pensar en ello como panacea, es evidente que una universidad moderna debe incorporar estos elementos.

⁸En estos cinco años de gestión, se han producido 15 boletines de información, con salida irregular. En realidad, la política de comunicación está dirigida «hacia afuera», hacia los medios de difusión, mediante gacetillas a los diarios y agencias de noticias, apareciendo un vacío inadmisibles en la comunicación «hacia adentro».

⁹Esta característica fue acertadamente destacada por Norma Paviglianitti en su ponencia presentada en las Jornadas del Grupo de Reflexión sobre la Universidad Argentina, agosto, 1987.

Otro signo del atraso académico de la universidad argentina está situado en la debilidad del terreno investigativo y del desarrollo del posgrado, que son habitualmente iniciativas que tienden a modificar el perfil de una universidad tradicional¹⁰.

En suma, nos encontramos con una baja capacidad de gestión institucional por no existir, o por existir con debilidad, los mecanismos institucionales que garantizarían el desarrollo de una gestión eficaz frente a la crisis estructural.

Nuestra universidad tiene una estructura atrasada en cuanto al desarrollo de instrumentos y concepciones para enfrentar los requerimientos de la sociedad a su universidad.

Estructuras y concepciones tradicionales y problemas y demandas modernas hacen una combinación explosiva para la gobernabilidad de la institución.

Un retrato hablado

Un aspecto que tiene peso importante es la insuficiente caracterización de la crisis universitaria, de la situación de excepción que, por ende, se está viviendo, y de las consecuencias políticas que puede acarrear la misma. Lo dicho se expresa, por un lado, en la confusión entre normalización y crisis.

La normalización es apenas el marco en el que se define la legitimidad del gobierno de la institución. Es fundamental que exista; sin duda es bueno que la universidad tenga una estructura de gobierno compleja y legítima, pero es condición necesaria, no suficiente. En el comportamiento de la mayoría de la administración universitaria opera sin duda un modo de entender los problemas institucionales que revela aquella confusión. Y es parte fundamental de ese estilo la forma de valorar la normalización, que se convierte en sinónimo de resolución de los problemas universitarios.

Esta concepción es uno de los obstáculos primordiales en el discurso oficial para comprender de un modo más acabado la situación presente. Se confunden las reglas de juego con el juego mismo; la legitimidad de las reglas, con el sentido y la

¹⁰Basta con decir que la investigación en ciencias físico-naturales discurre casi exclusivamente por instituciones específicas del sistema científico-tecnológico, como el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, y los institutos oficializados, y que la investigación en ciencias sociales se desarrolla mayoritariamente en un gran número de institutos privados sostenidos en general por sus vinculaciones con los grandes centros de investigación internacionales, tanto públicos como privados. El posgrado no está desarrollado como sistema en Argentina, donde recién se están dando los pasos para generalizarlo.

marcha de la institución. Lo que equivale a confundir al árbitro con los jugadores o la cancha con los goles.

Esta misma discusión se entabla en el momento de determinar la existencia y magnitud de la crisis. Advertimos aquí tres posiciones sobre el tema.

a) La que recién marcamos, y que entiende que en vez de «crisis» hay «problemas», de los cuales muchos ya están resueltos (normalización) y los que vienen se resuelven caso por caso, sin advertir mayores conexiones entre ellos.

b) La que plantea la tesis de la crisis permanente de la universidad nacional. Desde este punto de vista, la historia universitaria nos demostraría una permanente condición crítica de la institución, y por lo mismo hoy nos hallamos frente a un nuevo episodio de la misma. No hay ninguna valoración diferencial de los nuevos elementos que señalamos al comienzo. Esta es la tradicional tesis «de izquierda», acostumbrada a ver o a leer a la universidad en términos exclusivos de su potencial de conflicto.

c) La tesis que plantea la especificidad de la crisis actual, entendiéndola como una crisis de naturaleza general, que implica desajustes no sólo en el plano de las funcionalidades más políticas de la institución, sino que abarca también planos más íntimos de lo técnico-administrativo. Esta es la tesis que sustentamos y que pretende basarse en el análisis concreto de las nuevas condiciones sociales e institucionales en las que está inmersa la situación universitaria.

Veamos ahora algunas notas respecto de la gestión universitaria en curso. En primer término, hay que plantear una distinción fundamental para organizar un análisis equilibrado de la misma: no es responsabilidad del gobierno universitario la crisis inédita que vive la institución, pero sí es su responsabilidad no organizar un programa capaz de enfrentar la situación de excepción.

Desde 1983 no ha habido, públicamente, al menos, un diagnóstico sistemático de la situación de la UBA, ni se ha buscado generar un debate al respecto, pese a los reclamos reiterados desde distintos sectores.

Sin diagnóstico global y sin programa ordenador de la acción de gobierno, con una preocupación difusa por la modernidad, bautizada pomposamente Reforma Pedagógica, la gestión universitaria, sobre todo en su primera etapa, mostró sus límites.

En la actual gestión, iniciada a principios de 1986, se han hecho intentos, hasta ahora infructuosos, por plantear la cuestión programática y sobre todo la preocupación se ha centrado en la temática de la masividad¹¹. Sin embargo, el nivel restringido del debate, los límites que se advierten en los mismos documentos, y la propia dinámica de la crisis que venimos describiendo han condicionado mejores resultados. La consecuencia de no haber sido claros en la definición de la situación impidió hacer un inventario preciso de la universidad que emergió de la dictadura. Y como hemos visto, esta falta de claridad es tributaria de una concepción insuficiente y de una práctica limitada.

No se trata de evaluar el conjunto de las gestiones universitarias, sino simplemente de señalar aspectos de una concepción dominante, tanto por su hegemonía en algunos grandes centros universitarios como la UBA, como en la mayoría de los funcionarios de las administraciones universitarias emergentes de la normalización¹².

Y un gobierno universitario en estas condiciones carga con los efectos cotidianos de la crisis. Así como tuvo la ventaja de operar autocráticamente con los vacíos producidos por la dictadura militar en los primeros años - la política de los «hechos consumados» como forma de relación con los propios y extraños, la cooptación como forma de desorganización de posibles políticas alternativas, la propaganda como medio de difusión, etc. -, ahora tiene la desventaja del desgaste y las reacciones corporativas, exasperadas por la crisis.

Se lo responsabiliza por todos los efectos mediatos e inmediatos de la crisis. Desde el hacinamiento en el CBC¹³ hasta los programas obsoletos, desde el desprestigio de la universidad hasta su desconexión con la vida nacional. Y el resultado político de esta situación tiene toda una vertiente de masas que se encamina hacia la derecha, en un viraje imprevisible de la crisis.

¹¹ Se han producido los primeros documentos a los que se les puede atribuir cierto carácter programático, con el Documento de Inacayal (1986), y otros, dirigidos hacia la cuestión del ingreso y la descentralización. (Mar del Plata, 1987, Descentralización, 1988, Propuestas de los decanos Borthagaray, Sáenz, etc.).

¹² Hay que anotar que la pertenencia político-partidaria de los funcionarios universitarios se va ampliando; a los funcionarios de origen radical, independientes de diversa orientación, o figuras de perfil académico, se han sumado desde este año rectores de filiación peronista, como en los casos de la Universidad de Mendoza y de San Juan.

¹³ CBC (Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires).

El clima cultural de los 80 y el giro a la derecha

Otro aspecto para tomar en cuenta es lo que podemos llamar el clima cultural de los años 80, que en el caso argentino tiene, además de la influencia del neoconservadorismo, dos componentes específicos en la historia dramática de la década de los 70: la crisis de las expectativas de cambio, a partir de la derrota popular, y los efectos profundos del terrorismo de Estado.

Es sin duda diferente un contexto internacional de avance de los procesos de liberación, de la conformación del Tercer Mundo como alternativa a la política de los bloques, del protagonismo de los pueblos, etc., a otro donde el impulso transformador parece menguado; se hace evidente la crisis del socialismo real y de los modelos alternativos, la pérdida de peso del Tercer Mundo, agobiado por la deuda, mientras las diferencias económicas y sociales entre países ricos y pobres se ensanchan en el contexto del cambio tecnológico acelerado.

La situación internacional ya no proyecta ese dejo romántico, ese llamado a la transformación, a hacer posible lo imposible (a ser realistas pidiendo lo imposible del mayo francés), esa incitación a la epopeya popular, que eran los levantamientos contra los poderes coloniales, y en el caso de nuestra América Latina, la vocación independentista, buscando sacudirse toda tutela política y económica, buscando un camino propio y una identidad continental como latinoamericanos.

Pero en el caso argentino, el desarrollo del conflicto social en la década pasada deja huellas fundamentales para comprender los condicionantes del proceso de transición democrática.

Obviamente, no es este el lugar donde intentar un balance de lo sucedido en Argentina en esos años de manera global, pero lo que sí interesa es destacar algunas consecuencias claras.

En primer lugar, la desarticulación de las prácticas y los discursos que proponían algún nivel de transformación de la sociedad argentina. Los discursos excitativos a la acción, a la organización de los actores, a la participación masiva, sufrieron la contrastación brutal del Terror de Estado, que simbolizó una dramática prueba de la verdad para el conjunto de la sociedad argentina.

La consecuencia mayor de esta situación es la reducción del espacio público, por el doble proceso de achicamiento material, objetivo, del mismo que significó la dicta-

dura, como por la componente subjetiva, que significa el privilegiamiento de lo individual, del camino solitario por sobre cualquier solución colectiva y solidaria.

La situación tiene un grado de paradoja: el terror de Estado significó para el ciudadano común un nivel descomunal de control sobre la vida social e individual, que lo lleva en consecuencia a buscar poner distancia con el aparato estatal, a buscar la constitución de mediaciones que impidan ese respirar cuerpo a cuerpo del Estado terrorista, que institucionalizó la impunidad, la irresponsabilidad y la licuación de todas las garantías en el proceso represivo.

Cuando esto ocurre, el discurso más antiestatista, que es el de la derecha argentina, se coloca como referente político de la reacción pública al estatismo desenfrenado que significó la dictadura militar.

Así se completa el circuito. Es una simplificación decir que la derecha liberal argentina es la continuidad de la dictadura militar, porque esta continuidad no se manifiesta en la herencia política directa de un golpe de Estado que genera una descendencia civil, sino porque esta continuidad se eslabona por mecanismos indirectos, coincidiendo con la legítima reacción frente a una estructura estatal en crisis. Lo único que no aparece es la vinculación entre un proceso y otro. Y la posibilidad de que se produzca esta gigantesca operación político-ideológica muestra la relación de fuerzas en el campo cultural y, por ende, la debilidad de los sectores populares y progresistas.

La transición democrática permite una nueva relación con lo político, pero en el campo individual, la preocupación de lo público aparece al sentido común como impráctica, como una tarea propia de profesionales - los políticos -, poco alcanzable para el sujeto individual. Así los proyectos individuales se desorbitan de las soluciones colectivas a los graves y grandes problemas nacionales. Se abre el espacio para una relectura del drama argentino, que desdibuja sus aristas, y se instala en un realismo nada inocente, que erosiona y limita las posibilidades de acciones transformadoras colectivas, que condena sin atenuantes la «desmesura» de las ilusiones reformadoras.

Aparece así la cara cruda de la realidad: que cada uno trabaje para sí. El paso por la universidad es preparación para el ejercicio de una profesión jerarquizada, algo así como el boleto propio al bienestar y, por ello, la acción colectiva, si existe, se limita a exigir que la institución «funcione» para garantizarlo.

Y esta aspiración, por sí legítima, de recibir un entrenamiento eficaz en lo profesional, en condiciones adecuadas y con una cierta perspectiva profesional en su gestión y desarrollo, se expresa de modo corporativo.

La esencia del programa de la UPAU es exigir que la universidad funcione. De este modo recoge, a nivel de coyuntura, la condensación de todas las contradicciones que genera el disloque estructural de la institución. Motoriza el descontento ante los reclamos no satisfechos de una institución con baja capacidad de respuesta al desafío de la masividad. Los estudiantes no esperan sólo entrar a la universidad, esperan que luego se les dé una oportunidad real de profesionalización, y cuando descubren que el título no es una garantía laboral a su egreso, que las estructuras curriculares no habilitan integralmente para el ejercicio profesional posterior, y están sujetos además a condiciones malas (desde edilicias hasta didácticas) a su paso por la universidad, protestan. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Lo que aparece como nuevo es que esta vez la protesta tiene como aglutinante un discurso que potencia la restricción y el elitismo, y que globalmente se inscribe en un modelo de profundización de las diferencias sociales, políticas y culturales.

Para finalizar, es necesario señalar como contracara de este clima político-cultural adverso, la incapacidad que los sectores nacional-populares y de izquierda han tenido para responder a la nueva situación. Las razones históricas de esta debilidad, la valoración de la derrota de los sectores populares en la década pasada, así como el análisis de sus estrategias, exceden este trabajo. Sin embargo, importa conocer esta debilidad y plantear, o mejor dicho, enunciar, algunos de los grandes temas necesarios a resolver, si se pretende modificar esta condición. Romper el consignismo, politizar lo universitario desde la capacidad de actuar y pensar sobre lo concreto, construir una alternativa político-académica capaz de plantear un programa integral para la solución de la cuestión universitaria en un sentido popular, desarrollar una capacidad de liderazgo social particular (académico-institucional), aportar al desarrollo de una nueva cultura política universitaria.

Comenzar a responder desde la izquierda significa organizar un discurso y una práctica aggiornada, y consistente frente al doble desafío de la crisis institucional y del debate ideológico con una derecha renovada, eficaz y, por lo mismo, de masas.

La combinación de los elementos enunciados, crisis estructural, ausencia de diagnóstico y programa en la gestión universitaria, clima cultural que procesa los efectos inmediatos de la crisis en sentido corporativo y con un deslizamiento pronunciado hacia la derecha, y debilidad teórica y práctica de los sectores progresistas,

son algunos de los ingredientes básicos, aunque limitados en su explicitación en estas notas, para comenzar a despejar lo que se denomina en algunos titulares periodísticos «el fenómeno» de la derecha liberal en la universidad argentina.

Referencias

- *Borthagaray; Sáenz, DESCENTRALIZACION, 1988. - Mar del Plata, Argentina. 1987;
- *Brunner, J. J., UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD EN AMERICA LATINA: UN ESQUEMA DE INTERPRETACION. - Caracas, Venezuela, CRESALC-UNESCO. 1985;
- *Paviglianitti, Norma, JORNADAS DEL GRUPO DE REFLEXION SOBRE LA UNIVERSIDAD ARGENTINA. - 1987;
- *Talento, Miguel, UNIDOS. 19 - 1987; La cuestión militar.
- *Tedesco, Juan C., EL DESAFIO EDUCATIVO: CALIDAD Y DEMOCRACIA. - Buenos Aires, Argentina, Grupo Editor Latinoamericano. 1987;